TRIBUNAL SUPERIOR AGRARIO

SENTENCIA pronunciada en el juicio agrario número 1261/93, relativo a la ampliación de ejido, promovido por el poblado Francisco Villa, Municipio de Cajeme, Son.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Tribunal Superior Agrario.- Secretaría General de Acuerdos.

Visto para resolver el juicio agrario número 1261/93, correspondiente al expediente administrativo 1.3-894, relativo a la ampliación de ejido promovida por el poblado "Francisco Villa", Municipio de Cajeme, Estado de Sonora, en cumplimiento a la ejecutoria dictada el trece de septiembre de dos mil cuatro, por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora, en el juicio de amparo 242/2004-II, y

RESULTANDO:

PRIMERO.- Mediante sentencia de dos de diciembre de mil novecientos noventa y siete, este Tribunal Superior emitió resolución en el expediente en comento, cuyos puntos resolutivos fueron del tenor siguiente:

"PRIMERO.- Es procedente la solicitud de ampliación de ejido promovida por el poblado "FRANCISCO VILLA", del Municipio de Cajeme, Estado de Sonora.

SEGUNDO.- Se concede por concepto de ampliación de ejido, al poblado citado en el resolutivo anterior una superficie total de 389-91-67 (trescientas ochenta y nueve hectáreas, noventa y una áreas, sesenta y siete centiáreas) de agostadero susceptibles de cultivo, que se tomarán de la siguiente forma: 228-25-03 (doscientas veintiocho hectáreas, veinticinco áreas, tres centiáreas), del predio fracción de "Tesopobampo" propiedad de Silvia Elena y Norma Alicia Zazueta Ruíz; 80-00-00 (ochenta hectáreas) ubicadas en la manzana 820, lotes 21 al 24 y 31 al 34, así como fracciones de los lotes 11, 12, 23 y 24 propiedad de Silvia Elena Valenzuela de Castelo; 23-92-36 (veintitrés hectáreas, noventa y dos áreas, treinta y seis centiáreas) ubicadas en la manzana 718, lotes 21 y 22 y fracción del 23 (sic) propiedad de Eduardo Alcaráz Villa; 10-00-00 (diez hectáreas) ubicadas en la manzana 718, lote 31 propiedad de Marco Antonio Arvizu Araiza; 20-00-00 (veinte hectáreas) ubicadas en la manzana 718, lotes 32 y 33 propiedad de Emma Lourdes Saldamando Arvizu; y 27-74-28 (veintisiete hectáreas, setenta y cuatro áreas, veintiocho centiáreas), ubicadas en la manzana 728, lotes 34 y 35 y fracciones del 23 al 25 propiedad de María Eugenia Arvizu Swift, predios que se encontraron sin explotación por más de 20 años consecutivos sin causa justificada y por lo tanto afectables conforme a lo dispuesto por el artículo 251 interpretado a contrario sensu de la Ley Federal de Reforma Agraria, para beneficiar a 66 (sesenta y seis) campesinos capacitados, los cuales se relacionan en el considerando segundo de la presente sentencia; superficie que se localizará conforme al plano proyecto que obra en autos; la que pasará a ser propiedad del poblado beneficiado, con todas sus accesiones, usos, costumbres y servidumbres; en cuanto a la determinación del destino de las tierras y la organización económica y social del ejido, la asamblea resolverá de acuerdo con las facultades que le otorgan los artículos 10 y 56 de la Ley Agraria...".

SEGUNDO.- Contra el anterior fallo, Juan Antonio Hernández González, por su propio derecho y Pedro Ruiz García, en su carácter de administrador único y apoderado legal de Cajeme Productos Pecuarios, S.A. de C.V., promovieron juicio de garantías ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora, que se radicó bajo el número 449/99, el cual concluyó con la ejecutoria del diez de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos, en atención a las siguientes consideraciones:

"No se advierte que la autoridad responsable haya siquiera mencionado las pruebas documentales aportadas por los quejosos a través de sus apoderados legales GUILLERMO GARCIA IBARRA y ALFREDO ISLAS RODRIGUEZ (fojas 197 a 287), las cuales fueron agregadas a través del auto del veintidós de agosto de mil novecientos noventa y cuatro (foja 167), infringiendo así las reglas del artículo 189 de la Ley Agraria, el cual establece que las sentencias de los Tribunales Agrarios se dictarán a verdad sabida, sin necesidad de sujetarse a las reglas sobre estimación de pruebas, sino apreciando los hechos y los documentos según los Tribunales lo estimen en conciencia, fundando y motivando sus resoluciones; sin embargo, de la interpretación de dicho precepto no se advierte facultad alguna para que el Tribunal responsable omita el análisis de las pruebas que se hayan aportado, o bien, que sólo tome en cuenta aquellas que le sirvan para demostrar la acción que ejerció el núcleo de población tercero perjudicado, por tanto la responsable violó en perjuicio de los quejosos el citado precepto legal, con infracción del principio general de derecho, de congruencia y exhaustividad de la sentencia, el cual establece que el juzgador debe analizar y valor (sic) todas y cada una de las pruebas que existan en autos haciendo un estudio integral de aquéllas al momento de dictar sentencia, lo que en la especie no aconteció, pues como quedó establecido en el párrafo que se transcribió con anterioridad el Tribunal responsable para nada se ocupó ni siquiera de mencionar los elementos de prueba que aportaron los quejosos violando en su perjuicio las garantías de audiencia, seguridad jurídica y exacta aplicación de la ley prevista en los artículos 14 y 16 Constitucionales... (motivo por el cual se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal)... para el efecto de que el Tribunal responsable deje insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, dicte otra en la que con plenitud de jurisdicción analice las pruebas aportadas por los quejosos cuyo estudio omitió, en conjunto con todas y cada una de las pruebas aportadas por las partes, y hecho que sea, resuelva lo que en derecho proceda...".

TERCERO.- En cumplimiento a la ejecutoria de referencia este Tribunal Superior, en su carácter de autoridad responsable, una vez que repuso el procedimiento y que al mismo comparecieron los representantes legales de la persona moral denominada Cajeme, Productos Pecuarios, S.A. de C.V., a ofrecer pruebas y formular alegatos, se emitió sentencia el siete de marzo de dos mil, determinando lo siguiente:

“PRIMERO.- Por las razones expuestas en los considerandos sexto y séptimo de este fallo, se declaran inafectables en materia agraria, los inmuebles de 5-01-29 (cinco hectáreas, un área, veintinueve centiáreas) y 4-24-29 (cuatro hectáreas, veinticuatro áreas, veintinueve centiáreas) propiedad de Juan Antonio Hernández González, localizadas en los lotes 23 y 9 respectivamente del predio “Tesopobampo”, así como el terreno constituido por 3-84-00 (tres hectáreas, ochenta y cuatro áreas) ubicadas en los lotes 11 y 21, de la manzana 820, del fraccionamiento “Richardson”, del Valle del Yaqui, propiedad de la Sociedad denominada Cajeme Productos Pecuarios S.A. de C.V., inmuebles todos ellos localizados en el Municipio de Cajeme, Estado de Sonora.

SEGUNDO.- En consecuencia, se niega la dotación de las superficies señaladas en el resolutivo que antecede, en vía de ampliación de ejido al poblado denominado “Francisco Villa”, Municipio de Cajeme, Estado de Sonora.

TERCERO.- Publíquese esta sentencia en el **Diario Oficial de la Federación** y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sonora; los puntos resolutivos de la misma, en el Boletín Judicial Agrario y comuníquese al Registro Público de la Propiedad correspondiente; para que proceda a realizar las cancelaciones a que haya lugar...”.

CUARTO.- Es de suma importancia destacar que también contra la sentencia de dos de diciembre de mil novecientos noventa y siete, emitida por este Organismo Jurisdiccional en el juicio agrario que nos ocupa (a la cual se hizo mención en el resultando primero de este fallo), se promovió por la Sociedad de Producción Rural Esperancita de Responsabilidad Limitada, el diverso juicio de amparo indirecto 202/2001-II del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora, quien por ejecutoria de veinticuatro de septiembre de dos mil uno, concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, a la parte quejosa, en atención a las siguientes consideraciones:

“...resulta evidente que en la sentencia impugnada se incluyeron los lotes 22 y fracción del 23, ubicados en la manzana 718 de Fraccionamiento Richardson del Valle del Yaqui, Sonora, para dárselos por concepto de ampliación de ejido a un grupo de campesinos del poblado Francisco Villa y que por error se sostuvo que eran propiedad de Eduardo Alcaraz Villa, cuando en el caso, el quejoso acreditó ser propietario y posesionario de aquéllos, pues en el resultando decimotercero de la sentencia pronunciada en el juicio agrario 1261/93, relativa a la ampliación de ejido promovido por campesinos del poblado Francisco Villa, de este municipio, se estableció que el Cuerpo Consultivo Agrario por acuerdo de trece de noviembre de mil novecientos ochenta y seis, aprobó que se realizaran trabajos complementarios; que se recabara la información respectiva en cuanto al régimen de propiedad, con la certificación del Registro Público de la Propiedad correspondiente, entre otros terrenos, el que se dijo propiedad de Eduardo Alcaraz Villa, con superficie de 23-92-36 hectáreas, informando en lo relativo lo siguiente: “EDUARDO ALCARAZ VILLA.- Propietario de terreno rústico con superficie 23-92-36 hectáreas de la manzana 718 del Fraccionamiento Richardson del Valle del Yaqui, presentó escritura pública número 7420, volumen 172 de fecha dieciséis de abril de mil novecientos sesenta y nueve”; sin embargo, como se dijo, el quejoso acreditó que el terreno que ampara la escritura pública 7259, en mención, se encuentra inscrito a su favor desde mil novecientos noventa y dos, y asimismo, con el certificado de antecedentes expedido por el registrador de la oficina jurisdiccional de Cajeme del ICRESON (fojas 60 y 61); máxime que tampoco se advierte que su causahabiente Luis Enrique Rodríguez Valenzuela, haya sido llamado al juicio agrario 1261/93 citado, ya que el antecedente registral inmediato data del diecisiete de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, en favor del mencionado Luis Enrique Rodríguez Valenzuela.

En esa tesitura, al no haber sido llamado el impetrante de amparo al juicio agrario de origen, resulta evidente que la sentencia impugnada viola en su perjuicio las garantías de seguridad jurídica de audiencia y legalidad tuteladas por los artículos 14 y 16 Constitucionales por lo cual procede conceder el amparo protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el Tribunal Agrario responsable, deje insubsistente la sentencia impugnada, únicamente en lo que respecta a la afectación del terreno propiedad del quejoso, así como su ejecución por las restantes responsables, siguiendo los lineamientos trazados en esta sentencia.”

QUINTO.- En cumplimiento a la ejecutoria acabada de transcribir, este Tribunal Superior repuso el procedimiento llamando a juicio a la Sociedad de Producción Rural Esperancita de Responsabilidad Limitada, quien oportunamente compareció a través de su apoderado general ofreciendo pruebas de su parte. Consiguientemente, el ocho de julio de dos mil tres se emitió resolución por parte de este Organismo Jurisdiccional, determinando:

“...PRIMERO.- Se declara inafectable, y en consecuencia no procede conceder en dotación, en vía de ampliación de ejido, en favor del poblado “Francisco Villa”, municipio de Cajeme, Estado de Sonora, la

superficie de 15-92-93 (quince hectáreas, noventa y dos áreas, noventa y tres centiáreas) propiedad de la Sociedad de Producción Rural Esperancita de Responsabilidad Limitada, ubicada en la fracción sureste lote 11, fracción suroeste lote 12, fracción norte lote 21, fracción noroeste lote 22, de la manzana 718 y porción central del lote 30, de la manzana 716, del fraccionamiento Richardson, del Valle del Yaqui, Sonora.

SEGUNDO.- Publíquese esta sentencia en el **Diario Oficial de la Federación** y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sonora; los puntos resolutiveos de la misma, en el Boletín Judicial Agrario y comuníquese al Registro Público de la Propiedad correspondiente, para que proceda a realizar las cancelaciones a que haya lugar.

TERCERO.- Notifíquese a los interesados y comuníquese por oficio al Gobernador Constitucional del Estado de Sonora; a la Procuraduría Agraria y al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora, en cumplimiento a la ejecutoria dictada el veinticuatro de septiembre de dos mil uno, en el juicio de amparo 202/2001-II...".

SEXTO.- Con total independencia a los dos juicios de amparo que quedaron mencionados en los resultandos segundo y quinto del cuerpo de este fallo, contra la sentencia de dos de diciembre de mil novecientos noventa y siete (transcrita en el resultando primero de esta resolución), Carlos Ronquillo Meléndrez, promovió juicio de garantías 153/2001-II ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora, quien por ejecutoria de treinta de octubre de dos mil dos, concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión, señalando:

"...resulta evidente que en la sentencia impugnada se incluyeron los lotes 22 y fracción del 23, ubicados en la manzana 718 del fraccionamiento Richardson del Valle del Yaqui, Sonora, para dárselos por concepto de ampliación de ejido a un grupo de campesinos del poblado Francisco Villa y que por error se sostuvo que eran propiedad de Eduardo Alcaraz Villa, cuando en el caso, el quejoso acreditó ser propietario y posesionario de aquéllos, pues en el resultando decimotercero de la sentencia pronunciada en el juicio agrario 1261/93, relativa a la ampliación del ejido promovido por campesinos del poblado Francisco Villa, de este municipio, se estableció que el Cuerpo Consultivo Agrario por acuerdo de trece de noviembre de mil novecientos ochenta y seis, aprobó que se realizaran trabajos complementarios; que se recabara la información respectiva en cuanto al régimen de propiedad, con la certificación del registro público de la propiedad correspondiente, entre otros terrenos, el que se dijo propiedad de Eduardo Alcaraz Villa, con superficie de 23-92-36 hectáreas, informando en lo relativo lo siguiente: "EDUARDO ALCARAZ VILLA.- Propietario de terreno rústico con superficie 23-92-36 hectáreas de la manzana 718 del Fraccionamiento Richardson del Valle del Yaqui, presentó escritura pública número 7420, volumen 172 de fecha dieciséis de abril de mil novecientos sesenta y nueve"; sin embargo, como se dijo, el quejoso acreditó que el terreno que ampara la escritura pública 7259, en mención, se encuentra inscrito que a su favor desde mil novecientos noventa y dos, y asimismo, con el certificado de antecedentes expedido por el registrador de la oficina jurisdiccional de Cajeme del ICRESON (fojas 60 y 61); máxime que tampoco se advierte que su causahabiente Luis Enrique Rodríguez Valenzuela, haya sido llamado al juicio agrario 1261/93 citado, ya que el antecedente registral inmediato data del diecisiete de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, a favor del mencionado Luis Enrique Rodríguez Valenzuela.

En esta tesitura, al no haber sido llamado el impetrante de amparo al juicio agrario de origen, resulta evidente que la sentencia impugnada viola en su perjuicio las garantías de seguridad jurídica de audiencia y legalidad tuteladas por los artículos 14 y 16 Constitucionales, por lo cual procede concederle el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que el Tribunal Agrario responsable, deje insubsistente la sentencia impugnada, únicamente en lo que respecta a la afectación del terreno propiedad del quejoso, así como su ejecución por las restantes responsables, siguiendo los lineamientos trazados en esta sentencia...".

SEPTIMO.- En acatamiento a la ejecutoria antes transcrita, este Tribunal procedió por auto de cuatro de marzo de dos mil cuatro, a dejar parcialmente insubsistente la sentencia de dos de diciembre de mil novecientos noventa y siete, en la parte en que se había declarado afectable la superficie que resulta ser propiedad de Carlos Ronquillo Meléndrez.

OCTAVO.- El siete de enero de dos mil cinco este órgano jurisdiccional pronunció sentencia, en cumplimiento a la ejecutoria dictada en treinta de octubre de dos mil dos, por el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora, en el juicio de amparo 153/2001-II, cuyos puntos resolutiveos, fueron los siguientes:

"..PRIMERO.- No procede conceder en dotación, en vía de ampliación de ejido, en favor del poblado "Francisco Villa", municipio de Cajeme, Estado de Sonora, la superficie de 8-25-60 (ocho hectáreas, veinticinco áreas, sesenta centiáreas) en la cual se encuentra inmersa la extensión de 8-23-00 (ocho hectáreas, veintitrés áreas) propiedad de Carlos Ronquillo Meléndrez ubicada en las fracciones de los lotes 12, 13, 22 y 23 de la manzana 718, del fraccionamiento Richardson, del Valle del Yaqui, Sonora.

SEGUNDO.- Con excepción de la superficie que antecede, así como de aquellas otras que fueron materia de los fallos pronunciados por este Órgano Jurisdiccional y que se encuentran precisados en los resultandos tercero y quinto de esta sentencia, las demás extensiones de terreno concedidas en vía de ampliación de ejido

al poblado "Francisco Villa", Municipio de Cajeme, Estado de Sonora, se encuentran sujetas a la afectación decretada, en términos de la sentencia de dos de diciembre de mil novecientos noventa y siete.

TERCERO.- Publíquese esta sentencia en el **Diario Oficial de la Federación** y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sonora; los puntos resolutive de la misma, en el Boletín Judicial Agrario y comuníquese al Registro Público de la Propiedad correspondiente, para que proceda a realizar las cancelaciones a que haya lugar...".

NOVENO.- Ahora bien, con independencia de los juicios de garantías que han quedado relatados, es de hacerse notar que Víctor Gracia Esquivel promovió juicio de amparo contra la sentencia de dos de diciembre de mil novecientos noventa y siete, dictada por este Tribunal en el juicio agrario 1261/93; dicho juicio de garantías se radicó bajo el número 242/2004-II, ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora, quien por ejecutoria de trece de septiembre de dos mil cuatro, concedió al quejoso el amparo y protección de la Justicia de la Unión, en atención a las siguientes consideraciones:

"...Los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, son medularmente fundados y suficientes para conceder la protección constitucional solicitada.

Ciertamente, aduce el peticionario del amparo que la sentencia impugnada viola en su perjuicio las garantías de audiencia, juicio previo, legalidad y de exacta aplicación de la ley, tuteladas por los artículos 14 y 16 Constitucionales, habida cuenta que no fue emplazado al juicio agrario 1261/93, por ende, con la emisión de la sentencia respectiva, resultó afectado en la propiedad de la superficie de terreno consistente en el lote número 34 con superficie de 5-21-23 hectáreas, del predio Tesopobampo, municipio de Cajeme, Sonora...".

En efecto, de las constancias que integran el procedimiento agrario de origen, a las que se les concede valor probatorio pleno con fundamento en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del diverso numeral 2 segundo párrafo de la Ley de Amparo, ya que fueron certificadas por un fedatario público (secretario de acuerdos del tribunal responsable) en ejercicio de sus funciones, se advierte que el quejoso es ajeno al mismo, pues dicho procedimiento fue instaurado por una solicitud de ampliación de ejido promovida por un grupo de campesinos del poblado Francisco Villa, municipio de Cajeme, Sonora, y agotados los trámites legales, culminó con la sentencia impugnada, mediante la cual se declaró procedente la solicitud de ampliación, concediéndose por tal concepto al poblado Francisco Villa una superficie total de 389-91-67 hectáreas de agostadero susceptibles de cultivo, las cuales se tomaron de entre otros terrenos afectados, 228-25-03 hectáreas, ubicadas en el predio Tesopobampo, argumentándose que eran propiedad de Silvia Elena y Norma Alicia Zazueta Ruiz, según se advierte del resolutive sexto de la sentencia en comento, destacándose que aquellas propietarias vendieron diversas fracciones de terreno, entre las que supuestamente se encontraba la que ahora reclama el inconforme -la cual se había transmitido a Esteban Jiménez Núñez, quien a su vez lo vendió al ahora quejoso-; empero, no se advierte que el solicitante del amparo haya sido llamado a juicio para defender sus derechos, pues acreditó la propiedad del referido lote 34 con superficie de 5-21-23 hectáreas, del predio Tesopobampo, municipio de Cajeme Sonora, pues como se dijo, "... Según se desprende resultando decimotercero, punto quinto, de la sentencia combatida, esta fracción de terreno fue transmitida por Silvia Elena y Norma Alicia Zazueta Ruiz a favor de Esteban Jiménez Núñez el veintiséis de junio de mil novecientos ochenta, mismo a que su vez, el seis de abril de mil novecientos noventa, vendió al ahora quejoso a través del contrato de compraventa, contenida en la escritura pública 13,126 trece mil ciento veintiséis.

Ello es así, dado que la parte quejosa para acreditar la propiedad del terreno afectado y por ende, su interés jurídico, exhibió la copia certificada de la escritura pública 13,126, trece mil ciento veintiséis, volumen 460, cuatrocientos sesenta, protocolizada ante Carlos Serrano Patterson Notario Público número 64, de esta ciudad, donde consta la compraventa del inmueble ubicado en el lote 34, superficie 5-21-23 hectáreas del predio Tesopobampo, inscrita debidamente en el Registro Público de la Propiedad de esta ciudad el veinticinco de julio de mil novecientos noventa, bajo el número 77370, sección I, volumen 196, según se desprende de la certificación respectiva; documentales a las que con fundamento en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se les confiere valor probatorio pleno por ser documentos públicos, ya que fueron expedidos por fedatarios públicos en ejercicio de sus funciones y por sí solas resultan suficientes para justificar la propiedad del terreno controvertido a favor de la parte quejosa.

Al respecto, resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 226, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, del texto:

“DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y por lo siguiente, hacer prueba plena”.

En este contexto, resulta evidente que en la sentencia impugnada se incluyó el lote 34 con superficie de 5-21-23 hectáreas, del predio Tesopobampo, municipio de Cajeme, Sonora, para dárselo por concepto de ampliación de ejido a un grupo de campesinos del poblado Francisco Villa y que se sostuvo eran propiedad de Silvia Elena y Norma Alicia Zazueta Ruiz, quien había transmitido a Esteban Jiménez Núñez, cuando en el caso, el peticionario de garantías acreditó ser propietario de aquél, para los efectos del presente juicio de garantías exclusivamente, pues en el resultando decimotercero de la sentencia pronunciada en el juicio agrario 1261/93, relativa a la ampliación del ejido promovido por campesinos del poblado Francisco Villa, de este municipio, se estableció que el Cuerpo Consultivo Agrario por acuerdo de trece de noviembre de mil novecientos ochenta y seis, aprobó que se realizan trabajos complementarios; que se recaban la información respectiva en cuanto al régimen de propiedad, con la certificación del registro público de la propiedad correspondiente, entre otros terrenos, el que se dijo propiedad de Silvia Elena y Norma Alicia Zazueta Ruiz, con superficie de 228-25-03 hectáreas informando en lo relativo lo siguiente: “Anotaciones marginales venden a Esteban Jiménez Núñez la superficie de 5-21-23 Has. en el lote 34 del predio Tesopobampo, registrado bajo el No. 49095 sección I el veintiséis de junio de 1980. ...”; sin embargo, como se dijo, el quejoso Víctor Gracia Esquivel acreditó que el terreno que ampara la escritura pública trece mil ciento veintiséis, volumen cuatrocientos setenta de seis de abril de mil novecientos noventa, pasada ante la fe del notario público número 64 de esta Ciudad, licenciado Carlos Serrano Patterson, se encuentra inscrito a su favor desde el veinticinco de julio de mil novecientos noventa, y asimismo, con el certificado de antecedentes expedido por el registrador de la oficina jurisdiccional de Cajeme del ICRESON; de todo lo cual, se advierte que su causahabiente Esteban Jiménez Núñez, ni el ahora quejoso no fueron llamados al juicio agrario 1261/93 citado, como se desprende de las constancias del expediente, pues incluso la anotación marginal de la sentencia combatida se realizó hasta el cuatro de septiembre de dos mil uno, cuando como se mencionó el quejoso tiene registrado a favor tal predio desde el años de mil novecientos noventa, destacándose que en el documento en mención, se asentó que la búsqueda comprendió veinte años anteriores a la fecha cuatro de marzo de dos mil cuatro de expedición del mismo, por tanto, es inconcuso que la sentencia señalada como acto reclamado transgrede en perjuicio del promovente del amparo, las garantías de seguridad jurídica de audiencia y legalidad tuteladas por los artículos 14 y 16 Constitucionales...”.

DECIMO.- En cumplimiento a la ejecutoria de referencia este órgano jurisdiccional, por auto de tres de diciembre de dos mil cuatro, dejó insubsistente parcialmente la sentencia de dos de diciembre de mil novecientos noventa y siete, asimismo, por diverso proveído de once de enero de dos mil cinco, se determinó notificar a Víctor Gracia Esquivel para que compareciera a juicio, concediéndole el término de cuarenta y cinco días hábiles a efecto de que ofreciera pruebas y formulara alegatos.

DECIMO PRIMERO.- Mediante ocurso de treinta de marzo de dos mil cinco, Víctor Gracia Esquivel se apersonó a juicio, ofreciendo las pruebas y exponiendo los alegatos que convinieron a su interés, y

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos tercero transitorio del Decreto por el cual se reformó el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el **Diario Oficial de la Federación** el seis de enero de mil novecientos noventa y dos; tercero transitorio de la Ley Agraria; 1o., 9o. fracción VIII y cuarto transitorio fracción II de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios.

SEGUNDO.- El procedimiento agrario de ampliación de ejido, promovido por el poblado denominado “Francisco Villa”, ubicado en el municipio de Cajeme, Estado de Sonora, cuyo estudio nos ocupa, se ajustó a las formalidades establecidas en los artículos 272, 286, 287, 288, 291, 292, 304 en relación con el precepto 325 de la Ley Federal de Reforma Agraria, esto es, quedó acreditado que el poblado promovente fue constituido jurídicamente como un núcleo agrario ejidal, mediante Resolución Presidencial de veinte de diciembre de mil novecientos sesenta, publicada en el **Diario Oficial de la Federación**, el veintidós de marzo de mil novecientos sesenta y uno y ejecutada el veintinueve de junio de mil novecientos sesenta y dos, por la cual se le entregó en dotación 1,321-60-00 (mil trescientas veintiún hectáreas, sesenta áreas).

Por otra parte, consta en autos que el presente procedimiento de ampliación de ejido se inició a petición de un grupo de campesinos del referido ejido “Francisco Villa”, del diecisiete de enero de mil novecientos sesenta y seis, publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Sonora, el treinta de abril de ese mismo año.

En cuanto al requisito de procedibilidad previsto por el artículo 241 de la Ley Federal de Reforma Agraria, quedó satisfecho con el acta levantada por el personal de la Comisión Agraria Mixta, del dos de agosto de mil novecientos sesenta y seis, de la cual se desprende que los terrenos entregados en dotación al núcleo agrario de "Francisco Villa", se encontraron explotados.

Así también obran los trabajos censales que se llevaron a cabo en el poblado gestor; la opinión de la Comisión Agraria Mixta; de la Delegación Agraria en el Estado de Sonora y del Cuerpo Consultivo Agrario, al igual que los diversos trabajos técnicos informativos y complementarios que se practicaron para la integración de este expediente, los cuales se analizarán en los considerandos siguientes.

TERCERO.- En cuanto a los requisitos de capacidad agraria individual y colectiva del grupo de campesinos del poblado solicitante, ésta quedó acreditada de conformidad con lo dispuesto por los artículos 195, 196 fracción III interpretado a contrario sensu y 200 de la Ley Federal de Reforma Agraria, toda vez que de las diligencias censales llevadas a cabo, el once de agosto de mil novecientos sesenta y seis, y de los trabajos de revisión a los mismos, realizados el veinticuatro de junio de mil novecientos setenta y uno, se desprende que en el poblado de referencia, existen un total de 66 (sesenta y seis) campesinos capacitados.

CUARTO.- De acuerdo con el artículo 80 de la Ley de Amparo, las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, tienen por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, por lo que en cumplimiento a la citada disposición legal, y en estricto apego a la ejecutoria de trece de septiembre de dos mil cuatro, dictada por el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora, en el juicio de garantías 242/2004-II, promovido por Víctor Gracia Esquivel, este órgano jurisdiccional procede a emitir la presente resolución, precisando que la misma solamente se ocupará de analizar si resulta o no afectable el predio que defiende el quejoso antes nombrado, consistente en la superficie de 5-21-23 (cinco hectáreas, veintiún áreas, veintitrés centiáreas) de acuerdo a lo señalado en la ejecutoria materia de cumplimentación localizada en el predio "Tesopobampo" del Estado de Sonora.

QUINTO.- En consecuencia de lo acabado de expresar, conviene tener en cuenta antes de todo, dos cuestiones que resultan de suma relevancia:

a).- Que la sentencia dictada por este Tribunal el dos de diciembre de mil novecientos noventa y siete, en el expediente cuyo estudio nos ocupa, afectó entre otras superficies, la consistente en 228-25-03 (doscientas veintiocho hectáreas, veinticinco áreas, tres centiáreas), que se consideró como propiedad de Silvia Elena y Norma Alicia Zazueta Ruiz, aseverándose que con los datos aportados por los trabajos técnicos informativos que fueron practicados durante la substanciación de este expediente, se conocía que la aludida superficie había permanecido inexplorada por más de dos años consecutivos.

b).- Que Víctor Gracia Esquivel, dentro del juicio de garantías 242/2004-II, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora, acreditó ser titular de la fracción de 5-21-23 (cinco hectáreas, veintiún áreas, veintitrés centiáreas) del predio que perteneciera a Silvia Elena y Norma Alicia Zazueta Ruiz, y que éstas enajenaron a favor de Esteban Jiménez Núñez, quien por contrato de seis de abril de mil novecientos noventa lo enajenó a su vez a Víctor Gracia Esquivel.

Ahora bien, tomando en cuenta que la sentencia de dos de diciembre de mil novecientos noventa y siete, emitida por este Tribunal Superior en el presente asunto, había determinado afectar, entre otras superficies, la consistente de 228-25-03 (doscientas veintiocho hectáreas, veinticinco áreas, tres centiáreas) como propiedad de Silvia Elena y Norma Alicia Zazueta Ruiz, y confrontándola con la ejecutoria que es materia de cumplimentación, se colige de manera inobjetable, que la superficie de 5-21-23 (cinco hectáreas, veintiún áreas, veintitrés centiáreas) reclamadas en propiedad por Víctor Gracia Esquivel, se consideró como terreno perteneciente a las primeramente nombradas.

Por lo tanto, a continuación se analizarán los trabajos técnicos informativos que se practicaron durante la substanciación del expediente de ampliación de ejido del poblado "Francisco Villa", transcribiéndose únicamente la parte de dichos informes, que tiene que ver con la investigación realizada en el predio Tesopobampo, a fin de contar con elementos probatorios que permitan determinar si la superficie de 5-21-23 (cinco hectáreas, veintiún áreas, veintitrés centiáreas), reclamadas en propiedad por Víctor Gracia Esquivel, es o no susceptible de afectación.

En el informe de dieciocho de junio de mil novecientos setenta y seis que contiene los trabajos técnicos informativos practicados por el ingeniero Austreberto Escudero D., se consignó:

"Las superficies de las manzanas o bloks, como 718, y 820 (Terreno ocioso), 918; 920, 1018 y 1020 y 818, así como el predio de la familia Zazueta Ruiz (menores de edad Norma Alicia Zazueta Ruiz) que aparece como propietario del predio sin nombre con superficie de 228-25-03 Has., en la Hda., de Guadalupe, terreno que está ocioso y que la Secretaría de Recursos Hidráulicos, a los ejidatarios del Fco. Villa les construyó un represo para darle agua al ganado, la Familia Zazueta Ruiz aparece ahora como dueña del represo. Todos

estos terrenos estaban ociosos y fue la causa de que un grupo de campesinos el día 17 de enero de 1966 iniciaron el trámite para pedirlos por vía de Dotación. Los propietarios de las manzanas arriba citadas poseen terrenos de riego y agostadero en otros lugares, pero en el Mpio. de Cajeme, por lo que a mi parecer es justo que estos terrenos sean dotados al grupo solicitante ya que de acuerdo con los documentos exhibidos por estos propietarios es verdad lo dicho por los solicitantes...”.

Como puede apreciarse, la parte del informe acabado de transcribir es de desestimarse en virtud de que no se precisó, por el comisionado, las características o peculiaridades que denotaban la in explotación de la superficie que conformaba el predio Tesopobampo propiedad de Norma Alicia Zazueta Ruiz y si bien es cierto hace alusión a un estado de ociosidad, también lo es que no refiere el tiempo de ésta, es decir, si el predio estuvo in explotación seis meses, un año, dos años o más.

Por su parte, del diverso informe de veinte de julio de mil novecientos setenta y nueve (recibido en la Oficialía de Partes de la Secretaría de la Reforma Agraria el veinticinco del mes y año acabados de citar), que contiene los trabajos técnicos informativos llevados a cabo por el ingeniero Noel A. Casas Galván, se desprende:

“...NORMA ALICIA Y SILVIA ELENA ZAZUETA RUIZ.-228-25-03 Has de terreno de agostadero, ubicado en Tesopobampo, de la municipalidad de Cajeme, escritura 5720, Vol. 80 de fecha 14 de julio de 1970.-R:P 30214.- Explotación ganadera.- Colindancia: Norte, N. C. P. E. “FRANCISCO VILLA”, al sur: vía del ferrocarril del pacífico; este Ricardo Topete Polín, Oeste, N. C. P. E. “FRANCISCO VILLA”.

...

Se hizo el levantamiento de las superficies propuestas como afectables en el Dictamen del Cuerpo Consultivo Agrario, de fecha 21 de febrero de 1977, que son las siguientes: 208-25-03 Has, propiedad de Norma Alicia y Silvia Elena Zazueta Ruiz, ubicadas en el predio Tesopobampo ;...Cabe aclarar los siguientes puntos: que la superficie propiedad de Norma Alicia y Silvia Elena Zazueta Ruiz, estuvo durante los últimos años en explotación ganadera, no pudiéndose comprobar esto debido a que tuvieron que sacar el ganado, por causa de la escases de agua, informado de esto por los mismos solicitantes de ampliación de ejido, esta superficie es de agostadero con parte de superficies planas susceptibles al cultivo y partes cerriles, al efectuarse la inspección ocular, se observó que las superficies planas estaban sembradas con pasto “Buffel”, este predio cuenta con un represo, como se indica en el plano elaborado, y 20 Has de cártamo al temporal...”.

Los trabajos técnicos informativos antes transcritos, consignan la situación que prevalecía en el predio Tesopobampo, demostrando que éste no se encontraba dedicado a la ganadería, sin embargo, los propios solicitantes de tierras de este expediente, indicaron al comisionado que tal circunstancia se debía a la escasez de agua, lo que trajo como consecuencia que las propietarias sacaran su ganado, lo cual pone de manifiesto la existencia de una causa de fuerza mayor que impedía el total aprovechamiento del inmueble en estudio, de allí que el comisionado pese a haber señalado que el predio Tesopobampo tenía un represo, no indicara que el cultivo de cártamo que encontró en 20-00-00 (veinte hectáreas) fueran de riego, sino de temporal y además que sólo en superficies planas hubiera encontrado sembrado pasto “Buffel”.

En suma en el informe de los trabajos técnicos informativos en comento, el ingeniero que los llevó a cabo no señaló que el predio Tesopobampo, propiedad en ese entonces de Norma Alicia y Silvia Elena Zazueta Ruiz hubiera permanecido in explotación durante dos años consecutivos, circunstancia que haría afectable el inmueble de referencia, al tenor de lo dispuesto por el artículo 251 interpretado en sentido contrario de la Ley Federal de Reforma Agraria.

Por lo que toca al informe de ocho de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro, relativo a los trabajos técnicos informativos practicados por el comisionado Francisco Javier Zavala Gaxiola, se conoce:

“...99.- PROPIETARIA NORMA ALICIA ZAZUETA RUIZ, es propietaria de una superficie de 58-00-00 Has. de terreno de Agostadero, localizada en la hacienda de Guadalupe, Según Escritura Pública No. 5720 Volumen 80, se hace la aclaración que de la superficie original que señala la Escritura solamente posee y explota 58-00-00 Has. ya que el resto se fraccionó y vendió a distintas personas en lotes pequeños para el establecimiento de explotación agropecuaria...”.

Vinculando el informe de referencia con la copia del contrato de compraventa que obra de la foja 100 a 105 del legajo II, probanzas que desde luego tienen pleno valor por tratarse de documentales públicas al tenor de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, permiten demostrar que la referida escritura pública 5720 volumen 80, corresponde al contrato de compraventa de catorce de julio de mil novecientos setenta, por medio del cual Norma Alicia y Silvia Elena Zazueta Ruiz, adquirieron la superficie de 228-25-03 (doscientas veintiocho hectáreas, veinticinco áreas, tres centiáreas) del predio Tesopobampo, contrato que quedó inscrito bajo el número 30124 de veintinueve de julio de mil novecientos setenta en el Registro Público de la Propiedad.

En virtud de lo anterior, es inobjetable que el comisionado Francisco Javier Zavala Gaxiola, al investigar la superficie de 58-00-00 (cincuenta y ocho hectáreas) pertenecientes a Norma Alicia Zazueta Ruiz, se refirió a la

propiedad que originalmente estaba constituida de 228-25-03 (doscientas veintiocho hectáreas, veinticinco áreas, tres centiáreas) adquirida por la antes nombrada y por Silvia Elena Zazueta Ruiz, la cual en virtud de diversos contratos de compraventa celebrados por éstas, había quedado reducida a 58-00-00 (cincuenta y ocho hectáreas), las que se encontraron explotadas, es decir, no se reportaron que en el año de mil novecientos ochenta y cuatro, cuando se realizaron los trabajos técnicos informativos en comento, el predio de referencia estuviera ocioso y menos aún que hubiera permanecido así durante dos años consecutivos.

Por lo que respecta al informe de trece de junio de mil novecientos ochenta y cinco, suscrito por el comisionado Carlos Ferrer San Germán, se tiene:

“...La propiedad de las CC. NORMA ALICIA Y SILVIA ELENA ZAZUETA RUIZ, con superficie aproximada de 280-00-00 Has., limitadas como sigue:

AL NORTE: Terrenos Ejidales del Poblado FRANCISCO VILLA (Dotación).

AL SUR: Terrenos Ejidales del poblado EL HENEQUEN (Ampliación), de por medio derecho de vía del FF.CC. y Carretera Internacional.- Ciudad Obregón Navjoa.

AL ESTE: Con terrenos de la Familia ZAZUETA RUIZ.

AL OESTE: Con Campo de Tiro “Los Alcones”

Estos (terrenos) también conforme testimonio de los propios ejidatarios y solicitantes antes citados corroborando en forma verbal por los CC. MIGUEL RAKICH MEDINA, IVONNE MACHADO DE RAKICH, JORGE ECUAMEA, ING. JESUS ARROYO y las autoridades ejidales de los poblados EL HENEQUEN y LIC. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, vecinos del lugar, las citadas superficies han permanecido ociosas por más de 20 años. Actualmente dichas superficies están siendo fraccionadas como granjas familiares en lotes de una hectárea, habiéndose apreciado en la inspección ocular que existen dos instalaciones para la cría de aves y algunos lotes cercados, pero en su mayoría las superficies señaladas, se encuentran sin explotación...”.

El informe en comento es de desestimarse porque, en primer lugar, no se especificó por el comisionado las circunstancias o elementos de prueba que le permitieron percatarse de la inexplotación que dijo existía en el predio originalmente propiedad de Norma Alicia y Silvia Elena Zazueta Ruiz, en segundo lugar, la aseveración consistente en que esa inexplotación supuestamente databa desde veinte años anteriores, se encuentra claramente contradicha por los trabajos técnicos informativos que un año antes fueron practicados por Francisco Javier Zavala Gaxiola, quien reportó haber encontrado explotado el terreno de Norma Alicia y Silvia Elena Zazueta Ruiz, y en tercer lugar, debe tenerse en cuenta que en mil novecientos setenta y nueve, apenas seis años atrás el diverso comisionado Noel A. Casas Galván había indicado que la propiedad de las antes nombradas no tenía ganado en virtud de la escasez de agua que se presentó en esa época. A mayor abundamiento, conviene puntualizar que Norma Alicia y Silvia Elena Zazueta Ruiz, desde el veintiséis de junio de mil novecientos ochenta, ya habían enajenado una fracción de 5-21-23 (cinco hectáreas, veintiún áreas, veintitrés centiáreas) a Esteban Jiménez Núñez, quien resulta ser causahabiente de Víctor Gracia Esquivel, sin que el comisionado Carlos Ferrer San Germán, en los trabajos técnicos informativos que realizó, contenidos en el informe de trece de junio de mil novecientos ochenta y cinco, hubiera especificado la situación que guardaba esta última fracción.

En lo atinente al informe de quince de junio de mil novecientos ochenta y siete, referente a los trabajos técnicos informativos practicados por el comisionado Fausto Leyva Preciado, se tiene que reportó:

“...SILVIA ELENA Y NORMA ALICIA ZAZUETA RUIZ.- Escritura pública registrada bajo el No. 30214 Vol. 95, Sección I de fecha 24 de Julio de 1970, las cuales son propietarios de un predio rústico de agostadero con una superficie de 228-25-03 Has., este terreno se encuentra abandonado y sin ningún tipo de explotación (a excepción de una fracción de 5-01-29 Has., que se desglosan de esta superficie, misma que vendieron al C. JUAN ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ, en el cual tiene establecido una granja avícola que consta de las siguientes instalaciones: 2 gallineros construidos con estructuras metálicas y techo de asbesto de 11.80 Mts., por 160 Mts., de largo con capacidad de 10 toneladas cada una. Una casa habitación con todos sus servicios y un almacén de material y techado con lámina de asbesto. Un pozo profundo equipado con un tanque elevado para 40,000 Lts., Asimismo cuenta con todo su sistema eléctrico y se encuentra cercado en todo su perímetro con alambre de púas, presentando para constancia de su propiedad copia simple de la Escritura Pública No. 5300 de fecha 27 de Marzo de 1980, inscrita en el Registro Público de la Propiedad de Cd. Obregón, Sonora el 6 de Mayo de 1980 bajo el No. 48727 de la Sección I Vol. 140, misma que ampara la superficie antes mencionada...”.

Anotaciones marginales: Venden a JUAN ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ UNA SUPERFICIE DE 5-01-29 Has, en el lote 23 de la propiedad de referencia, registrada bajo el número 48727, sección I, el 6 de mayo de 1980, superficie que se encuentra ocupada y explotada con una granja avícola con las instalaciones que anteriormente se describieron.

Venden a BRUNO COTA ISLAS los lotes 1, 2, 3, 14, 13 y 15 del predio Tesopobampo con superficie de 23-08-45 Has, registrada bajo el número 48901 el 3 de junio de 1980.

Venden a ESTEBAN JIMENEZ NUÑEZ superficie de 5-21-23 Has, en el lote 34 del predio Tesopobampo registrado bajo el número 49095, sección I el 26 de junio de 1980.

Venden a ESTEBAN JIMENEZ NUÑEZ (sic) superficie de 5-21-23 Has, en el lote 34 del predio Tesopobampo registrado bajo el número 49095, sección I el 26 de junio de 1980.

Venden a OSCAR RUSSO VOGEL... superficie de 3-14-70 Has.

Venden a GERMAN PABLOS TIRADO Y RAFAEL ENCINAS VALENZUELA superficie de 18-03-40 Has,...

Venden a SALA ALICIA CAMPOY VALENZUELA superficie de 4-50-00 Has,...

Venden a CARLOS VELIZTENA superficie de 4-50-00 Has,...

...

Se hace la aclaración que todas estas fracciones a excepción de la del C. JUAN ANTONIO HERNANDEZ GONZALEZ, se encuentran abandonadas y sin ningún tipo de explotación, así como la superficie que le resta a las propietarias, desde hace aproximadamente 20 años...

Asimismo el comisionado opina en una forma muy personal que los predios que se pueden afectar para esta acción agraria, son los de los referidos de SILVIA ELENA y NORMA ALICIA ZAZUETA RUIZ y personas que adquirieron superficie 228-25-03 Has., ...a excepción de dos granjas avícolas una localizada en los terrenos de SILVIA ELENA Y NORMA ALICIA ZAZUETA RUIZ con superficie de 5-01-29 Has, y otra en los terrenos de SILVIA ELENA VALENZUELA DE CASTELO con un a superficie de 3-84-00 Has..."

El informe acabado de relatar, es de desestimarse en la parte en la cual alude a la supuesta in explotación de la fracción de terreno que se derivó de la propiedad de Norma Alicia y Silvia Elena Zazueta Ruiz, de 5-21-23 (cinco hectáreas, veintiún áreas, veintitrés centiáreas) perteneciente a Esteban Jiménez Núñez (quien resulta ser causahabiente de Víctor Gracia Esquivel), por las mismas razones que se esgrimieron para restarle eficacia probatoria al informe rendido por Carlos Ferrer San Germán, las cuales en obvio de repeticiones innecesarias se tienen por reproducidas en este apartado, agregándose a las mismas el hecho particular consistente en que no se consignaron los elementos de prueba que sirvieron de sustento al comisionado para conocer de manera objetiva el estado de ociosidad que dijo existía.

En el informe de veintiocho de septiembre de mil novecientos ochenta y siete, suscrito por Rigoberto Vega Ramírez, responsable de área de asistencia técnica No. 15, de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, mencionó:

"...En Fracciones del Predio Tesopobampo, propiedad de Norma Alicia y Silvia Elena Zazueta Ruiz, con superficie de 227-56-67 Has.,

Predio propiedad de Eduardo Alcaraz Villa...

Predio propiedad de Marco Antonio Arvízu Araiza...

Predio propiedad de Emma Lourdes Saldamando...

Predio propiedad de Eugenia Arvízu...

Predio propiedad de Silvia Elena Valenzuela de Castelo...

Se encontraron las siguientes características:

Textura- Arcillo- Arenosa; tipo de vegetación – predominante perennes, como mezquite en su mayoría y cactus en menor número.

A la fecha no se ha realizado desmontes; explotación – no ha sido posible debido a la falta de agua por estar esta área ubicada fuera del perímetro de riego, y dentro de zona de veda; topografía- irregular en la mayor parte del área..."

Por su parte en el informe de ocho de octubre de 1987, rendido por el comisionado Fausto Leyva Preciado, se consignó en la parte que interesa:

"...En el predio de Silvia Elena y Norma Alicia Zazueta Ruiz, ubicado en Fracción de TESOBAMPO, con superficie de 228-25-03 Has., se encontró que estos terrenos son de agostadero, susceptibles al cultivo, mismos que se encontraron ociosos y abandonados, al no encontrar ganado de ninguna especie (a excepto de una granja avícola, en una superficie de 5-01-20 Has., totalmente cercada con alambre de púas, esta granja está compuesta de dos gallineros de 11.80 Mts. de ancho por 160.00 Mts., de largo Jaula provista con bebedero automático, con capacidad de 112,896 aves, un tanque de 40,000 Lts., de agua dos tanques de 1,200 Lts. Para cada caseta; cuatro tolvas de lámina para almacenar alimento con capacidad de 10 toneladas, un almacén de material y un pozo profundo con bombeo sumergible. Esta fracción de terreno es propiedad del

C. Juan Antonio Hernández González y la obtuvo mediante contrato de compraventa, según Escritura Pública No. 5300, Libro CXXX, con fecha 27 de Marzo de 1980...

Asimismo la S.A.R.H. elaboró estudio técnico por conducto del T.A. Rigoberto Vega Ramírez, de acuerdo a la solicitud que se le requirió por medio del oficio de comisión de 18 de agosto del año en curso...".

Los dos informes que anteceden con valor probatorio pleno por provenir de servidores públicos en ejercicio de sus funciones, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, demuestran, por una parte, que en septiembre de mil novecientos ochenta y siete, cuando llevó a cabo sus trabajos el comisionado de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos de nombre Rigoberto Vega Ramírez, el predio Tesopobampo considerado como propiedad de Norma Alicia y Silvia Elena Zazueta Ruiz, se describió la textura del suelo y la vegetación existente, indicándose que en esa época no se habían realizado desmontes en el inmueble de referencia debido a la falta de agua y no contar con sistema de riego; por otra parte, el diverso comisionado Fausto Leyva Preciado, no sólo hizo alusión al informe acabado de señalar, sino además hizo referencia directa al hecho de haber encontrado ocioso y abandonado el predio Tesopobampo considerándolo como propiedad de las antes nombradas y que sólo una fracción de dicho inmueble perteneciente a Juan Antonio González de 5-01-20 (cinco hectáreas, un área, veinte centiáreas), la encontró destinada a una granja avícola, pero por que contaba con tanques para almacenar agua con capacidad de 40,000 litros y 1,200 litros. Sin embargo, nótese que el comisionado Fausto Leyva Preciado no puntualizó la situación que en concreto imperaba en la fracción del predio Tesopobampo que correspondía a Esteban Jiménez Núñez y que actualmente es propiedad de Víctor Gracia Esquivel, pero aun en el supuesto de considerar que fue encontrado ocioso, pues así se señaló la situación del predio antes nombrado, en tal caso debe tenerse en cuenta que no se reportó si esa inexploración databa de dos años y además, que no se debía a una causa de fuerza mayor, para de esta suerte considerar afectable la fracción de dicho inmueble perteneciente a Juan Antonio González, causahabiente de Víctor Gracia Esquivel, de 5-21-23 (cinco hectáreas, veintiún áreas, veintitrés centiáreas).

En efecto, Víctor Gracia Esquivel una vez que fue notificado para que compareciera a juicio, y estando dentro del término que al efecto se le concedió por escrito de treinta de marzo de dos mil cinco, se apersonó al procedimiento exhibiendo, entre otras pruebas, las siguientes:

a).- Documental Pública, consiste en escritura número 13,126 volumen 470, protocolizada ante el Notario Público número 64 de Ciudad Obregón, Sonora, de seis de abril de mil novecientos noventa relativa al contrato de compraventa por medio del cual Esteban Jiménez Núñez enajenó a favor de Víctor Gracia Esquivel, la fracción de terreno ubicado en el lote 34 (treinta y cuatro) del predio denominado Tesopobampo, Municipio de Cajeme, Estado de Sonora, con superficie de 5-21-23 (cinco hectáreas, veintiún áreas, veintitrés centiáreas), inscrito debidamente ante el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Obregón, Sonora, con el número 77370 de la sección I, volumen 196, de veinticinco de julio de mil novecientos noventa.

Cabe destacar que en la documental en comento se hace referencia al hecho consistente en que Esteban Jiménez Núñez comprobó haber adquirido el aludido inmueble a través de la diversa escritura pública, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Cajeme, Estado de Sonora, bajo el número 49095, sección I, de veintiséis de junio de mil novecientos ochenta, es decir, dicho registro corresponde al señalado por el comisionado Fausto Leyva Preciado, en su informe de quince de junio de mil novecientos ochenta y siete, por medio del cual se demostró que Norma Alicia y Silvia Elena Zazueta Ruiz vendieron a Esteban Jiménez Núñez la fracción del predio Tesopobampo conformada de 5-21-23 (cinco hectáreas, veintiún áreas, veintitrés centiáreas).

b).- Documentales públicas, consistentes en diversos pagos del impuesto predial sobre el inmueble de mérito, precisado en el inciso anterior.

c).- Documental Pública, consistente en certificado expedido por el registrador de la oficina jurisdiccional de Cajeme ICR-407305, de cuatro de marzo de dos mil cuatro en donde se destaca que el predio enunciado en el inciso a) corresponde en propiedad a Víctor Gracia Esquivel, de acuerdo a los antecedentes registrales localizados en dicha dependencia.

Las probanzas antes relatadas, por tratarse de documentales públicas, tienen pleno valor al tenor de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles y vinculándolas a la totalidad de los trabajos técnicos informativos que han quedado mencionados en líneas precedentes y que se encuentran fechados el dieciocho de junio de mil novecientos setenta y seis, veinte de julio de mil novecientos setenta y nueve, ocho de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro, trece de junio de mil novecientos ochenta y cinco, quince de junio de mil novecientos ochenta y siete, así como veintiocho de septiembre y ocho de octubre de mil novecientos ochenta y siete, permiten arribar a la convicción, ninguno de dichos trabajos técnicos proporciona datos sobre la inexploración que por dos años consecutivos hubiese existido en la fracción del predio Tesopobampo conformada de 5-21-23 (cinco hectáreas, veintiún áreas, veintitrés

centiáreas), propiedad actualmente de Víctor Gracia Esquivel y que anteriormente perteneciera a Esteban Jiménez Núñez y Norma Alicia y Silvia Elena Zazueta Ruiz.

En las relatadas condiciones la superficie de 5-21-23 (cinco hectáreas, veintiún áreas, veintitrés centiáreas), localizada en el predio Tesopobampo, deviene inafectable para satisfacer necesidades agrarias del poblado "Francisco Villa", Municipio de Cajeme, Estado de Sonora.

Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en la fracción XIX del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 189 de la Ley Agraria; 1o. 7o. y la fracción II del cuarto transitorio de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, se

RESUELVE:

PRIMERO.- No procede conceder en dotación, en vía de ampliación de ejido, en favor del poblado "Francisco Villa", Municipio de Cajeme, Estado de Sonora, la superficie de 5-21-23 (cinco hectáreas, veintiún áreas, veintitrés centiáreas), localizada en el predio Tesopobampo, propiedad de Víctor Gracia Esquivel.

SEGUNDO.- Con excepción de la superficie que antecede, así como de aquellas otras que fueron materia de los fallos pronunciados por este Organismo Jurisdiccional y que se encuentran precisados en los resultandos tercero, quinto y octavo de esta sentencia, las demás extensiones de terreno concedidas en vía de ampliación de ejido al poblado "Francisco Villa", Municipio de Cajeme, Estado de Sonora, se encuentran sujetas a la afectación decretada, en términos de la sentencia de dos de diciembre de mil novecientos noventa y siete.

TERCERO.- Publíquense: esta sentencia en el **Diario Oficial de la Federación** y en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Sonora; los puntos resolutivos de la misma, en el Boletín Judicial Agrario y comuníquese al Registro Público de la Propiedad correspondiente, para que proceda a realizar las cancelaciones a que haya lugar.

CUARTO.- Notifíquese a los interesados y comuníquese por oficio al Gobernador Constitucional del Estado de Sonora; a la Procuraduría Agraria y al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora, en cumplimiento a la ejecutoria dictada el trece de septiembre de dos mil cuatro, en el juicio de amparo 242/2004-II.

Así, por unanimidad de cinco votos, lo resolvió el Tribunal Superior Agrario; firmando en suplencia del Magistrado Presidente licenciado Ricardo Villalobos Gálvez, el Magistrado Numerario licenciado Rodolfo Veloz Bañuelos y la Magistrada Supernumeraria Carmen Laura López Almaraz, en suplencia de este último, en términos de los artículos 3o. y 4o. párrafo segundo de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, así como los artículos 59 y 60 del Reglamento Interior de los Tribunales Agrarios, ante el Secretario General de acuerdos, que autoriza y da fe.

México, Distrito Federal, a veintisiete de mayo de dos mil cinco.- El Magistrado Presidente, **Rodolfo Veloz Bañuelos**.- Rúbrica.- Los Magistrados: **Luis Octavio Porte Petit Moreno, Marco Vinicio Martínez Guerrero, Luis Angel López Escutia, Carmen Laura López Almaraz**.- Rúbricas.- El Secretario General de Acuerdos, **Humberto Jesús Quintana Miranda**.- Rúbrica.